



Aviso Legal

Capítulo

Título de la obra: Megaproyectos y resistencia. El caso del Bala-Chepete, Bolivia

Autor: Hernández Maldonado, Luz Elena

Forma sugerida de citar: Hernández, L. E. (2023). Megaproyectos y resistencia. El caso del Bala-Chepete, Bolivia. En D. R. Gómez, G. Makaran, D. A. Márquez y C. A. Ortega (Coords.), *Futuros que están siendo. Investigación-creación por los senderos de luchas autónomas y comunitarias en América Latina* (193-200). Universidad Nacional Autónoma de México, Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe; Bajo Tierra Ediciones.

Publicado en el libro:

Futuros que están siendo. Investigación-creación por los senderos de luchas autónomas y comunitarias en América Latina

Diseño de portada: Marie-Nicole Brutus H.
Diseño de interiores: Irma Martínez Hidalgo
ISBN: 978-607-30-4532-2

Los derechos patrimoniales del capítulo pertenecen a la Universidad Nacional Autónoma de México. Excepto donde se indique lo contrario, este capítulo en su versión digital está bajo una licencia Creative Commons Atribución-No comercial-Sin derivados 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0 Internacional). <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es>



D.R. © 2023 Universidad Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04510, México, Ciudad de México.
Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe
Piso 8 Torre II de Humanidades, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, Ciudad de México. <https://cialc.unam.mx>
Correo electrónico: cialc-sibiunam@dgb.unam.mx

Con la licencia:



Usted es libre de:

- ✓ Compartir: copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato.

Bajo los siguientes términos:

- ✓ Atribución: usted debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Pueden hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante.
- ✓ No comercial: usted no puede hacer uso del material con propósitos comerciales.
- ✓ Sin derivados: si remezcla, transforma o crea a partir del material, no podrá distribuir el material modificado.

Esto es un resumen fácilmente legible del texto legal de la licencia completa disponible en:

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.es>

En los casos que sea usada la presente obra, deben respetarse los términos especificados en esta licencia

Megaproyectos y resistencia. El caso del Bala-Chepete, Bolivia

Videorreportaje

Luz Elena Hernández Maldonado¹

En el año 2006, después de un periodo de convulsiones en todo el país, llega a la presidencia de Bolivia Evo Morales, quien, junto con su partido, el Movimiento Al Socialismo (MAS), anunció una modificación de la idea clásica del Estado-nación e inauguró el llamado “Proceso de cambio” en la vida política en el marco de un Estado Plurinacional, que prometía, entre otras cosas, la inclusión de los sectores indígenas en la toma de decisiones.

Este ascenso al poder tiene como antecedentes directos la “Guerra del Agua”, en contra de la privatización de este líquido vital para la vida en Cochabamba bajo el gobierno de Hugo Bánzer, que, con la ley 2029, adjudicó la facultad de gestión a la

¹ Doctorante en Estudios Sociales, UAM Iztapalapa. Es licenciada en sociología y maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM. Sus líneas de investigación son: Estado, instituciones, movimientos sociales, y procesos políticos en América Latina. Correo: elenazmaldonado@gmail.com

empresa transnacional “Aguas de Tunari”. Ello trajo como consecuencia el descontento de gran parte de la población que tenía a su cargo el servicio. De esta manera, se forma la “Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida”, que será el órgano que agrupará tanto a sindicatos como a trabajadores no sindicalizados, entidades autónomas, organizaciones vecinales, campesinos, maestros y estudiantes, al integrar en un solo órgano la multiplicidad de sectores rurales y urbanos, recuperando así la administración del agua.

El segundo antecedente fue la “Guerra del Gas”, levantamiento popular que comienza en febrero de 2003, cuando el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada instaure un denominado “impuestazo” del 8% sobre el salario y, sobre todo, la privatización del gas boliviano que iba a ser enviado a Estados Unidos vía Chile, lo que desató grandes protestas, que incluyeron a los sectores de clase media. El conflicto se agudiza con la “masacre de Warisata”, enfrentamiento ocurrido entre comunidades campesinas aymaras de tierras altas y el Ejército, lo que termina en septiembre como un clamor popular por la justicia que logra, una vez más, cohesionar al movimiento conformado por todas las identidades que habitan en Bolivia.

Estos levantamientos sociales lograron desbordar los límites institucionales e imponerse ante la entonces debilitada estructura estatal; sin embargo, después de este cambio de dirección en la vida política, el movimiento indígena-popular se encontró ante la disyuntiva de cómo conducir al país en esta ruptura, por lo cual, para conservar la estabilidad institucional, el entonces vicepresidente, Carlos Mesa, asumió como presidente provisional. Mesa formuló su plan de gobierno en torno a tres ejes principales: referéndum sobre el gas, establecimiento de una Asamblea Constituyente y una reforma a la ley de hidrocarburos, tomando una postura conciliadora ante las distintas perspectivas que se formaron alrededor del gas, pues mientras la Central Obrera Boliviana y el Partido Socialista rechazaron por completo la

medida de exportarlo, algunos Comités Cívicos y el sector empresarial la apoyaron.

El MAS optó por una postura intermedia que, aprovechando el momento, puso en el escenario político su proyecto de ley, según el cual las contribuciones de las empresas debían ascender a 50%, que acompañó con una serie de bloqueos de caminos convocados en el Chapare, imponiéndose gracias a la fuerza y el número de cocaleros. Como consecuencia de esta fuerza política acumulada, para diciembre del año 2005, apoyado por los múltiples sectores de la población movilizada, el MAS triunfa de manera contundente en las elecciones generales.

Este contexto nos ayuda a comprender que una de las demandas centrales del movimiento indígena-popular que inicia en 2000 se relaciona directamente con la gestión de los recursos no renovables por las comunidades, así como con la oportunidad de organizarse al interior de sus propios territorios en su forma particular de política. A pesar de que el protagonismo de las movilizaciones fue llevado la mayor parte del tiempo por los pueblos originarios y los sectores populares, al final será el MAS el que conduzca las riendas del nuevo Estado.

El ascenso del MAS ocurre en un momento de crisis estructural del aparato estatal boliviano; el MAS llegar al poder aún sin una base sólida de plan de gobierno que garantice la autonomía y la gestión de recursos y vuelve a dejar en manos de una estructura estatal las decisiones sobre el asunto público que han afectado a los habitantes de la Amazonía, debido tanto al desconocimiento de la región (en términos físicos, políticos y culturales), como a su negativa por incorporarse a las estructuras sindicales o estatales propias del nuevo Estado llamado “plurinacional”.

Sumado a esto, encontramos que la economía internacional requiere de la conversión de los recursos naturales en *commodities*, por lo que los países que cuentan con ellos adquieren un valor sin precedentes, impulsando regímenes económicos extractivistas, unidos a la apuesta por megaproyectos, llamados de

desarrollo, que suelen ser programas de infraestructura a gran escala con inversiones de millones de dólares. Esto significa que, regularmente, tienen injerencia de empresas extranjeras, privadas y estatales, en mancuerna con los gobiernos locales de los países donde se implementan.

Una de sus principales características es que se construyen en lugares ricos en recursos naturales, pues éstos se han vuelto indispensables para la extracción de energía, así como para su posterior producción y transporte. Bajo la lógica de generar ganancias que, según el discurso oficial, servirán para el desarrollo a través de la creación de más y mejores empleos, así como para el aumento de la calidad de vida de las colectividades en que se asientan y de todo el país, estos planes se han vuelto parte de la agenda política de muchos gobiernos latinoamericanos, siendo elevados en muchos casos a asuntos de interés nacional.

Parte de la estrategia incluye la creación de políticas públicas que permiten la ejecución de los planes diseñados para la región, pues al estar proyectados en ciertos espacios, regularmente habitados por comunidades indígenas que se relacionan de manera distinta que la utilitarista con su entorno, han tenido como consecuencia la generación de conflictos, mismos que van a impactar tanto en la eficacia de la gobernabilidad, como en la capacidad de negociación entre los distintos actores sociales.

Tal es el caso del Amazonas boliviano, una parte del país que se ha encontrado históricamente aislada, en algunos casos por voluntad propia y en otros por la dificultad que supone llegar a estos espacios. Ésta tiene ciertas particularidades naturales que dificultan el hábitat humano: al estar compuesta en su mayor parte por bosque tropical y articulada por ríos, el acceso al lugar se convierte en una especie de reto. De estas fértiles y siempre verdes tierras es posible extraer un sinnúmero de elementos de aprovechamiento en distintos rubros, como el industrial, cosmético y alimenticio.

Ante el desconocimiento de la región y con la demanda de recursos naturales para el funcionamiento del mercado mundial, las poblaciones asentadas en las orillas del río Beni se han encontrado en confrontación abierta con el Estado por la defensa de sus territorios. Con el ascenso del MAS al poder, la pregunta principal que surgió fue ¿será capaz este nuevo gobierno de atender las demandas del mercado internacional y al mismo tiempo respetar y preservar las particulares maneras de vida asentadas en estos espacios?

En este orden de ideas se ha presentado el caso del Bala Chepete, dos espacios ubicados al norte de Bolivia, sobre el río Beni, que es de los más caudalosos del país. Esto ha generado el interés constante de los gobiernos que, desde de la década de 1950, han intentado extraer energía hídrica debido a la impresionante fuerza de su afluente.

A pesar de las constantes campañas que se han hecho para poder explotar la energía, basadas en la riqueza que generaría para el país, la falta de conocimiento espacial ha impedido que los proyectos para esta región se concreten, pues la misma exuberancia de la selva ha obstaculizado llevar a cabo una exploración profunda sobre la zona que refleje los verdaderos impactos ambientales y culturales que representa la construcción de una represa hidroeléctrica. La colocación de un par de diques en el río, que no sólo regularían la afluencia, sino que también inundarían una parte de la selva, fue considerada por las mismas empresas encargadas de los estudios de impacto como inviable, justamente por el costo ambiental.

Durante toda la legislación del MAS hubo una campaña constante para la construcción de esta represa, sin considerar los costos sociales, las repercusiones culturales o políticas que se desprenden de un proyecto de esta amplitud; por el contrario, en varias ocasiones se denunció el acoso constante contra quienes se oponían a la postura gubernamental que intentó imponer la construcción de este megaproyecto. En este sentido, estamos ante

la paradoja de que el Estado boliviano, constituido como plurinacional, basado en el reconocimiento de la autodeterminación de los pueblos indígenas, en realidad, estaba violando, por ejemplo, el derecho a la consulta previa, libre e informada establecido en la Constitución. Así, el gobierno simplemente informó con entusiasmo a la población que el estudio llevado a cabo por la empresa italiana Geodata había reabierto la posibilidad de construir esta represa que convertiría a Bolivia en el “centro/corazón energético de Sudamérica”. Se trataría de la producción de energía destinada principalmente a la exportación.

Al enterarse de los planes gubernamentales, las comunidades que habitan en las laderas del río comenzaron a preocuparse por su hogar, pues a pesar de que los voceros del gobierno argumentaron que únicamente se afectaría a 2% del área protegida, por lo que tendría impactos mínimos, no pensaron en las comunidades indígenas que se verían directamente dañadas por el desplazamiento forzado al cual estarían sometidas de concretarse el proyecto. Es necesario destacar que estas comunidades construyen todo su imaginario cultural y sociopolítico alrededor del río, por lo que la edificación de esta represa los pondría en peligro de etnocidio, pues probablemente desaparecerían a cambio de la generación de energía. Si bien el Bala-Chepete se presenta como un proyecto de energía limpia que además aumentaría los ingresos del Estado, existen intereses y acuerdos con otros países, como Brasil, que han comprometido al gobierno a actuar de manera contraria a las necesidades y deseos reales de la población.

Ante esta situación, el 17 de octubre de 2016 se llevó a cabo un ejercicio de participación que logró aglutinar a diversos pueblos indígenas como tsimanes, uchupiamonas, tacanas, mosetenes, torewas, chinay y lajas, los que no sólo discutieron sobre la amenaza a la vida que representa el megaproyecto, sino que presentaron algunas alternativas al mismo, evento al cual tuve la oportunidad de acudir en el marco del trabajo de campo durante mi investigación de maestría en estudios latinoamericanos.

Durante mi estancia en el amazónico Rurrenabaque, como también en el angosto de El Bala, los campamentos turísticos al interior de la selva, junto con los centros de investigación y universidades de La Paz y Cochabamba, en Bolivia, tuve la oportunidad de entrevistar a variedad de personas, entre ellas, guardias, académicos, estudiantes, investigadores, profesores, caseras (mujeres que atienden puestos en los mercados) y, por supuesto, a gente de las comunidades que rechazaba de manera enérgica la construcción de la represa. El rechazo se debía a los distintos malestares que el megaproyecto podía ocasionar, pero también al atropello a la consulta previa, libre e informada que decanta en la toma de decisiones de manera unilateral por el gobierno, lo que representa una afrenta directa a la voluntad y autodeterminación de los pueblos.

Frases como “Al Evo se le ha olvidado que nosotros somos bravos, que no nos vamos a dejar” o “El gobierno hace lo que le da la gana” fueron constantes en las conversaciones que sostenía con las personas, lo cual arrojó como resultado un evidente repudio, ya no sólo a la construcción de estos proyectos, sino a la gestión misma del gobierno.

Esta reunión se convocó explícitamente para tomar acciones en contra de los planes de construcción del megaproyecto, por lo que hubo participación directa de los representantes de las comunidades (y en muchos casos de los mismos pobladores), lo que dio la oportunidad de conocer directamente las exigencias y preocupaciones existentes en torno a este proyecto. Estuve presente durante las aproximadamente cinco horas en las que se intercambiaron puntos de vista entre las comunidades. Como consecuencia de esta reunión, se redactó un documento firmado por 16 de las comunidades que serían afectadas, en el cual se oponían a la construcción del embalse. En este sentido, el documento intenta dar una idea de la forma en que se han manejado los asuntos de orden público en Bolivia.

El video de mi autoría que presento a continuación tiene la intención de mostrar, sobre todo, los rostros de las personas que habitan aquella zona y su forma de vida, que ayuda a entender que detrás de los megaproyectos se encuentran individuos y colectivos que históricamente han protegido y siguen defendiendo sus territorios y sus bosques. Estos espacios se han convertido en una suerte de mercancía, no sólo para las empresas, sino para los gobernantes, sin importar la afiliación política o adscripción étnica, que responden a los planes del falso desarrollo. La experiencia ha demostrado que lejos de buscar atender las necesidades locales, responden a lógicas de “refuncionalización” del espacio para la producción y explotación de la naturaleza en favor de grandes capitales, lo que ha generado una serie de conflictos derivados de este ordenamiento espacial. La resistencia que se teje desde las comunidades indígenas que luchan por conservar sus territorios y sus modos de vida es la que inspiró el siguiente material.